



EDITORIAL

LA URGENCIA DE REINVENTAR LO COMÚN

“¡Estamos en guerra! No sé por qué me miras con una cara tan bonita” (Ailton Krenak).

“... la guerra es la continuación de la política por otros medios” (Focault).

“...la política debe ser el arte de hacer posible lo imposible” (Marta Harnecker)."

Durante al menos medio siglo, la humanidad ha reconocido que el planeta arde. Desde Estocolmo en 1972, pasando por Río-92, el Protocolo de Kioto, hasta el Acuerdo de París y las sucesivas COP, hemos acumulado diagnósticos y resoluciones que dan fe de lo obvio: el cambio climático no es una amenaza futura, sino una realidad presente. Y, sin embargo, la paradoja se repite como una herida que se niega a cicatrizar: mientras las conferencias internacionales se multiplican, las promesas se acumulan y los informes se espesan, el motor del desarrollo industrial-financiero sigue avanzando, alimentado por el mismo combustible de siempre: la acumulación ilimitada, la mercantilización de la vida, la transformación de la naturaleza misma en un activo de mercado. La riqueza producida por esta devastación continúa siendo apropiada de una manera muy desigual. Las desigualdades solo se están profundizando, a nivel mundial y local. La brecha entre lo que se necesita y lo que se ha hecho es cada vez más abismal.

La razón de esta brecha es política y estructural. El capitalismo industrial, y más tarde su fase contemporánea de financiarización, no es solo un arreglo técnico de producción; es una máquina de valor que internaliza las ganancias privadas y *externaliza* costos sociales y ecológicos. En la última década, el fenómeno se ha descrito con precisión. La tierra, los bosques, los servicios ecosistémicos e incluso la atmósfera (a través de la idea de "créditos") se transforman en instrumentos financieros. La financiarización de la naturaleza promete corregir las fallas del mercado, al tiempo que a menudo replica y amplifica las prácticas de apropiación. En la práctica, se vende el derecho a contaminar, se crea un mercado de remedios climáticos y, con ello, se abre un nuevo frente de especulación sobre territorios y vidas.



Los últimos datos científicos no han dejado lugar a la complacencia. No es nuevo que los informes de evaluación del IPCC sinteticen evidencia de que los impactos climáticos ya se manifiestan con creciente intensidad y que evitar escenarios catastróficos requiere transformaciones rápidas, profundas y simultáneas en los sistemas energéticos, agrícolas, urbanos y financieros. La degradación ambiental tiene impactos diarios en la vida de la población. Es un problema que afecta a la salud pública en todos los rincones del mundo. La contaminación del aire, el suelo y el agua se traduce en mortalidad y morbilidad evitables (enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, intoxicación por metales pesados, etc.). No faltan estudios que estiman que la contaminación se encuentra entre las principales causas de muerte que podrían evitarse en el mundo, con millones de vidas perdidas anualmente y importantes impactos económicos en las comunidades y los sistemas de salud.

En la Amazonía, la expansión de la agroindustria y la minería amenaza los territorios indígenas y provoca violencia directa contra los líderes. En el Cerrado, las comunidades quilombolas pierden sus territorios por los monocultivos de soja y caña de azúcar. Las comunidades ribereñas se enfrentan a la muerte de peces y a la pérdida de medios de subsistencia debido a las presas y la contaminación industrial. Las consecuencias, por lo tanto, no son abstractas. Se insinúan en el plato y los pulmones, en la sequía y la inundación, en los alimentos contaminados y en el agua contaminada. Se materializan en los cuerpos de poblaciones indígenas expulsadas de sus tierras, de ribereños que ven sus ríos transformados en aguas residuales, de quilombolas asediados por el avance del agronegocio. Se trata de biomas devastados, territorios mutilados y culturas enteras en riesgo. No hay separación posible entre ecología y justicia social. La defensa del medio ambiente es inseparable de la defensa de los pueblos que lo habitan y preservan. Lo que los economistas llaman "externalidades" negativas no son accidentes colaterales, sino el corazón mismo de un modelo que se basa en la depredación de la vida.

Los impactos, sin embargo, no se distribuyen equitativamente. Las poblaciones indígenas, los quilombolas, los ribereños y las comunidades campesinas suelen pagar el precio más alto. Son ellos los que enfrentan el desplazamiento forzado, el envenenamiento de los recursos hídricos, la pérdida de alimentos y prácticas culturales, la criminalización de la resistencia y la violencia directa contra sus cuerpos, violencia que a menudo resulta en la muerte. En Brasil, tragedias como la ruptura de las presas de relaves en Mariana (2015) y Brumadinho (2019) han expuesto la confluencia entre la



industria extractiva, la fragilidad regulatoria y el daño socioambiental masivo: nos recuerdan que la "externalidad" allí significa la destrucción de formas de vida enteras. La protección efectiva de estos derechos está vinculada tanto a los instrumentos internacionales como a la movilización local y a la capacidad de justicia restaurativa; En muchos casos, sin embargo, el sistema judicial y las negociaciones compensatorias han demostrado repetidamente ser insuficientes para restaurar vidas y ecosistemas.

En los discursos institucionales y en el mercado, con cada movimiento de la sociedad organizada en el sentido de exigir y buscar soluciones, se presentan soluciones que prometen conciliar conservación y capital, con nuevas maquiillajes —siempre siguiendo la misma lógica— soluciones, que prometen conciliar conservación y capital: mercados de carbono, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques/REDD+, créditos de biodiversidad, mecanismos de pago por servicios ecosistémicos. Pero la evidencia crítica está creciendo, y los análisis más recientes señalan que muchos proyectos sobreestiman las reducciones, crean incentivos que pervierten la lógica declarada de protección de los ecosistemas y pueden resultar en violaciones de derechos, desplazamiento o conservación instrumentalizada, una mercantilización que, además de ser frágil en términos de integridad climática, tiende a reproducir las desigualdades.

Los mecanismos de mercado son instrumentos para la producción y reproducción de desigualdades. El río de una comunidad pobre está contaminado porque tiene menos poder político para resistir. La solución del mercado a menudo profundiza la injusticia. Los ricos pagan para contaminar y los pobres soportan los costos de la degradación o son expulsados de sus territorios para la creación de unidades de conservación o proyectos de compensación. En resumen, la financiarización y sus mecanismos de mercado preservan las estructuras de poder al tiempo que transfieren la responsabilidad de la degradación producida a territorios ya vulnerables.

El capitalismo, como sistema, depende de la producción de desigualdades. La externalización de los costes ambientales es clave en este proceso. No es un defecto, sino una característica. El capital trata a la naturaleza como una mina infinita de recursos y, al mismo tiempo, como una alcantarilla, un sumidero infinito de residuos. Esta es una premisa estructural, no es un error que se pueda corregir, arreglar, equiparar. No hay posibilidad de "crecimiento verde" o desacoplamiento de la lógica de la acumulación y la reproducción ampliada en una escala que importa, que marca la diferencia en lo global. Los mecanismos de financiarización empleados en la llamada protección socioambiental



hacen lo contrario de lo que anuncian, subordinan la vida, y todo lo que le sirve de base, a la valorización financiera. Lejos de ser una solución, es la etapa suprema de la mercantilización. Representa la colonización final de los bienes comunes planetarios por la lógica de la reproducción del capital.

Si el diagnóstico es grave, también hay una acumulación de alternativas prácticas y políticas, no solo ideas abstractas. Los movimientos sociales (La Vía Campesina, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra entre los más visibles), las redes agroecológicas, las experiencias comunitarias de soberanía alimentaria, las propuestas para el "buen vivir" y las corrientes teóricas del decrecimiento y la economía regenerativa presentan repertorios concretos basados en prácticas de producción campesina que reducen los insumos industriales; prever modelos de gobernanza comunitaria; construyen brechas, como los derechos de la naturaleza plasmados en las constituciones (como en las experiencias andinas); Trabajar con estrategias de transición justa que articulen empleos, capacitación y protección social en la transición hacia economías bajas en carbono. Estas experiencias comparten un rasgo común. Se esfuerzan por replantear el valor como reciprocidad y cuidado en lugar de mera extracción de ganancias. Pero también necesitamos imaginar otros que aún no se han probado.

El horizonte inmediato puede parecer estrecho y saturado por las promesas vacías del mercado, pero es precisamente en este callejón sin salida donde debemos ejercitar la imaginación política. Donna Haraway nos recuerda que la teoría no es una mera descripción de la realidad, sino también la fabulación, la creación de figuras que nos autorizan a pensar lo impensable. Su "cyborg" y su "Chthuluceno" no son metáforas ornamentales, sino gestos de ruptura que pueden romper dualismos naturalizados y, quizás, tienen la fuerza de convocarnos a habitar otras posibilidades de existencia. En el corazón de la crisis ecológica, imaginar es un acto radical. Es a través de la invención de mundos, mundos de cooperación multiespecie, de reciprocidad en lugar de acumulación, de cuidado en lugar de expropiación, que damos cabida a alternativas que ahora son minoritarias para que sean viables. Sin esta fabulación crítica, permaneceremos confinados en el círculo vicioso del capital, incapaces de concebir salidas más allá de su devastadora gramática. Imaginar, como insiste Haraway, **no es un escape, es una condición** para la supervivencia.

Pero el desafío es titánico. Las fuerzas que alimentan el modelo actual son poderosas, globalizadas, arraigadas en instituciones políticas y económicas que capturan no solo la agenda



ambiental, sino que se esfuerzan por mantener nuestras mentes encerradas en alternativas ontológicamente en bancarota. Las conferencias, paneles y cumbres internacionales, en muchos casos, son etapas de retórica sin consecuencias. Son promesas que no se cumplen, compromisos que no cruzan el papel. Las COP siguen destacando la estrategia de "mucho ruido y pocas nueces" y la realización de la COP 30 en Brasil es solo un acto más en este teatro de farsas. Entre el diagnóstico lúcido de la ciencia y la inercia de la política, el tiempo se escapa, y con él la oportunidad de evitar lo irreversible.

Y los caminos hacia otros mundos posibles también son caminos políticos. Las transformaciones necesarias son, por definición, políticas. Hay negociaciones de poder, disputas sobre agendas, el diseño de instrumentos públicos y, sobre todo, la democratización de las decisiones sobre los recursos y el futuro. Los instrumentos técnicos sin bases democráticas o sin participación real de las poblaciones afectadas tienden a ser capturados por los intereses corporativos. La categoría de "transición justa" es un ejemplo de un intento de institucionalizar la equidad en el proceso de cambio, que requiere diálogo social, planes industriales y protección laboral, pero su realización depende de la voluntad política y el financiamiento público específico. En otras palabras: sin una política radicalmente redistributiva, las tecnologías por sí solas no desatan los nudos estructurales del problema.

El quid de la cuestión sigue siendo, y aquí debemos ser claros y sin eufemismos: mientras la reproducción ampliada del capital dependa de la extracción continua, la coexistencia entre la acumulación infinita y los límites biofísicos será cada vez menos posible. Esto no significa que los cambios puntuales sean inútiles; significa que no serán suficientes ni socialmente justos si no forman parte de un proyecto de reestructuración más amplio. La alternativa real requiere rediseñar los flujos de inversión, restringir la captura privada de bienes comunes, garantizar derechos territoriales efectivos, promover economías de cuidado e instituir mecanismos que coloquen la preservación de la vida como una prioridad normativa.

Por lo tanto, es necesario llamar a las cosas por su nombre: la crisis ambiental no es un problema técnico, ni un accidente en el camino. Es la herida producida por un modelo civilizatorio que devora las posibilidades del futuro. Es una herida que sangra. Con cada árbol talado, cada río envenenado, cada especie extinta, no solo perdemos biodiversidad, perdemos la posibilidad del futuro cercano y el futuro de la especie humana. ¿Hasta cuándo seguiremos buscando la imposible



reconciliación entre la acumulación de capital y la preservación de la vida? ¿Hasta cuándo naturalizaremos la devastación en nombre de un progreso que ya no promete un futuro?

Estas preguntas son tanto una invitación como una advertencia. Invitación a la reflexión crítica y, sobre todo, a la acción colectiva. Advierte que ya no hay tiempo para ilusiones conciliadoras. Si queremos existir como humanidad, tendremos que reinventar el sentido mismo del desarrollo, rechazar el desierto que se anuncia y afirmar, con valentía, que otro mundo no sólo es posible: es urgente. El tiempo de la Tierra no espera. Y la acción política ya no puede dudar.

Morrinhos, 17 de septiembre de 2025.

Vilma de Fátima Machado